Constancia Secretarial: Vencidos los términos de traslado dispuestos en la lista fijada por la secretaría de la Corporación, únicamente los fondos privados de pensiones accionados remitieron en término los alegatos de conclusión en esta sede.

Pereira, 10 de abril de 2024.

DIEGO ANDRÉS MORALES GÓMEZ

Secretario

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

SALA DE DECISIÓN LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ

PEREIRA, VEINTICUATRO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICUATRO

Acta de Sala de Discusión No 59 de 22 de abril de 2024

SENTENCIA ESCRITA

Se resuelven los recursos de apelación interpuestos por el fondo privado de pensiones **PORVENIR S.A.** y la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES** en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito el 11 de septiembre de 2023, así como el grado jurisdiccional de consulta dispuesto a favor de COLPENSIONES, dentro del proceso promovido por la señora **GLADYS ELENA TORO GÓMEZ**, cuya radicación corresponde al N°66001310500320200025501, en el que también se encuentran demandada la **AFP PROTECCIÓN S.A.**.

CUESTIÓN PRELIMINAR

En atención a que la Sala Plena de la Corte Constitucional en sentencia SU107-2024, luego de analizar las acciones de ineficacia de los traslados del régimen de prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual con solidaridad,

decidió, con efectos “inter pares”, modular el precedente de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en lo atinente a la valoración probatoria, ratificando tácitamente que la acción que debe incoarse en ese tipo de asuntos es precisamente la de **ineficacia del acto jurídico que significó el traslado entre regímenes pensionales**; en adelante se aplicará estrictamente esa línea de pensamiento.

ANTECEDENTES

Pretende la señora Gladys Elena Toro Gómez que la justicia laboral acceda a la ineficacia de la afiliación efectuada al régimen de ahorro individual con solidaridad, así como la del movimiento ejecutado al interior de ese régimen pensional y consecuentemente que se declare válida y vigente la afiliación primigenia efectuada al régimen de prima media con prestación definida.

Con base en esas declaraciones aspira que se condene a los fondos privados de pensiones accionados a girar la totalidad de los dineros a que haya lugar y las costas procesales.

Refiere que: Nació el 7 de enero de 1962; después de afiliarse al régimen de prima media con prestación definida, decidió trasladarse al régimen de ahorro individual con solidaridad por medio del fondo privado de pensiones Protección S.A. en el año 1996; para ejecutar el acto jurídico que significó el cambio de régimen pensional, no recibió la información que la ley exigía para ese momento, es decir, no se le hizo una exposición de la totalidad de las ventajas y sobre todo las desventajas que acarrearía cambiar de régimen pensional; posteriormente se movilizó hacia la AFP Porvenir S.A., sin embargo, tampoco recibió la información completa y veraz de lo que significaba permanecer afiliada en ese régimen pensional.

El 24 de agosto de 2020, ante solicitud elevada por ella, la Administradora Colombiana de Pensiones negó su retorno al RPMPD, argumentando que se

encontraba inmersa en la prohibición legal prevista en el literal e) del artículo 13 de la ley 100 de 1993 modificado por el artículo 2° de la ley 797 de 2003.

La demanda fue admitida en auto de 27 de noviembre de 2020 -archivo 12 carpeta primera instancia-.

La Administradora Colombiana de Pensiones contestó la demanda -archivos 15 y 26 carpeta primera instancia- oponiéndose a la totalidad de las pretensiones elevadas por la señora Toro Gómez argumentando que su cambio de régimen pensional operó bajo el cumplimiento de la totalidad de las exigencias legales de la época, añadiendo que la actora tampoco puede retornar al RPMPD al encontrarse incurso en la prohibición legal prevista en el literal e) del artículo 13 de la ley 100 de 1993 modificado por el artículo 2° de la ley. Formuló las excepciones de mérito que denominó “*Prescripción*”, “*Inexistencia de la obligación demandada*” y “*No condena en costas*”.

El fondo privado de pensiones Porvenir S.A. respondió el libelo introductorio -archivo 28 carpeta primera instancia- oponiéndose a la totalidad de las pretensiones de la demanda, argumentando que el acto jurídico mediante el cual la actora se trasladó al RAIS goza de plenos efectos jurídicos, asegurando que la información que le brindó la AFP Protección S.A. con la que se materializó ese cambio de régimen pensional no fue engañosa o falsa, agregando que el movimiento realizado por la señora Toro Gómez al interior del RAIS, también cumplió todas las exigencias legales. De todas maneras, manifiesta que no es posible que la demandante regrese al RPMPD, ya que ella se encuentra incurso en la prohibición legal establecida en el literal e) del artículo 13 de la ley 100 de 1993 modificado por el artículo 2° de la ley 797 de 2003. Propuso como excepciones de fondo las de “*Validez y eficacia de la afiliación a Porvenir*”, “*Prescripción*”, “*Buena fe*” e “*Innominada o genérica*”.

La AFP Protección S.A. respondió la acción -archivo 31 carpeta primera instancia- manifestando que el traslado entre regímenes pensionales ejecutado por la

demandante en el año 1996 se realizó bajo el estricto cumplimiento de la Ley, añadiendo que la señora Gladys Elena Toro Gómez no hizo uso de los mecanismos legales que tenía a su disposición para regresar en tiempo al régimen de prima media con prestación definida. No se opuso a la prosperidad de las pretensiones, pero formuló las excepciones de fondo que denominó como *“Genérica o innominada”*, *“Prescripción”*, *“Buena fe”*, *“Compensación”*, *“Exoneración de condena en costas”*, *“Inexistencia de la obligación”*, *“Falta de legitimación en la causa y/o ausencia de personería sustantiva por pasiva de mi representada”*, *“Inexistencia de la fuente de la obligación”*, *“Inexistencia de la causa por inexistencia de la oportunidad”*, *“Ausencia de perjuicios morales y materiales irrogados por parte de esta entidad llamada a juicio”*, *“Afectación de la estabilidad financiera del sistema en caso de acceder al traslado”*, *“Excepción de mérito seguro previsional”* y *“Excepción de mérito cuotas de administración”*.

En sentencia de 11 de septiembre de 2023, la funcionaria de primera instancia, aplicando en su integridad la jurisprudencia vigente que sobre el tema ha emitido la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, concluyó, después de analizar las pruebas allegadas al proceso, que la AFP Protección S.A. no cumplió con la carga probatoria que le incumbía en este proceso, al verificar que no le brindó la información que debía ponerle de presente a la señora Gladys Elena Toro Gómez, esto es, las características de ambos regímenes pensionales con sus ventajas y desventajas, razón por la que accedió a la ineficacia del traslado al RAIS surtido el 8 de julio de 1996; y en consecuencia declaró válida y vigente la afiliación primigenia efectuada al régimen de prima media con prestación definida administrado actualmente por Colpensiones.

En la parte considerativa de la providencia, indicó que el fondo privado de pensiones Porvenir S.A., al que se encontraba vinculada actualmente la demandante, debía remitir a Colpensiones la totalidad de los dineros de la cuenta de ahorro individual de la actora, esto es, los provenientes de las cotizaciones o aportes al sistema general de pensiones, así como los dineros que fueron cobrados a la afiliada por concepto de gastos o cuotas de administración, primas de los seguros previsionales y los dineros destinados a financiar la garantía de pensión mínima, debidamente

indexados; no obstante, en la parte resolutive le ordenó a dicha entidad en el ordinal tercero que *“proceda a trasladar ante la entidad COLPENSIONES todo el capital que aparece en la cuenta individual de la demandante en los términos indicados precisamente en esta sentencia.”*.

Posteriormente, en el ordinal cuarto de la sentencia, decidió *“Autorizar a la entidad PORVENIR S.A. para que pueda repetir frente a la AFP frente a la otra entidad AFP, en los aspectos que tenga que responder, conforme a la ineficacia que se declaró aquí.”*, es decir, no emitió ninguna condena en contra del fondo privado de pensiones Protección S.A.

A continuación, decidió que ante la posibilidad de que se hubiere generado un bono pensional en favor de la demandante con al cambio de régimen pensional fallido, se comunicara la decisión a la OPB del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que realice las acciones que estime pertinentes respecto del bono pensional que hubiere podido emitir a nombre de la afiliada.

No emitió condena por concepto de costas procesales.

Inconformes con la decisión, el fondo privado de pensiones Porvenir S.A. y la Administradora Colombiana de Pensiones interpusieron recursos de apelación en los siguientes términos:

El apoderado judicial de la AFP Porvenir S.A. sostiene que, conforme con lo dicho por la demandante en el interrogatorio de parte, quedó demostrado que el fondo privado de pensiones Protección S.A., al momento de ejecutar el cambio de régimen pensional de la actora, le brindó la totalidad de la información que debía de ponerle de presente de acuerdo con la Ley, razón por la que no se configuró la ineficacia de ese acto jurídico, añadiendo que la señora Toro Gómez no hizo uso de las herramientas jurídicas otorgadas por el legislador para regresar en término al RPMPD.

De otro lado, sostiene que en este tipo de casos no es procedente ordenar la restitución de la totalidad de los dineros ordenados por la funcionaria de primera instancia, ya que realmente los únicos rubros que son susceptibles de ser devueltos a la Administradora Colombiana de Pensiones son los provenientes de las cotizaciones o aportes al sistema general de pensiones, pues los demás rubros se generaron precisamente por la afiliación de la demandante al régimen de ahorro individual con solidaridad, añadiendo en lo concerniente a los gastos o cuotas de administración, primas de los seguros previsionales y dineros destinados a financiar la garantía de pensión mínima, que ellos son cobrados en estricto cumplimiento de la ley, lo que permite una excelente gestión de la cuenta de ahorro individual del afiliado, además de generar la cobertura frente a los riesgos de invalidez y muerte, por lo que la devolución de esos rubros constituyen un enriquecimiento sin causa para Colpensiones y un detrimento patrimonial para el fondo privado de pensiones.

La apoderada judicial de la Administradora Colombiana de Pensiones interpuso recurso de apelación solicitando la revocatoria de la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito, ya que en el proceso quedó demostrado que el cambio de régimen pensional realizado por la señora Gladys Elena Toro Gómez cumplió con el lleno de los requisitos que la ley exigía para ese momento, sin que le sea dable alegar después de tanto tiempo que fue engañada, solo por ver fallidas sus expectativas en el régimen de ahorro individual con solidaridad, ya que lo que verdaderamente se vislumbra es un interés netamente económico que no puede, adicionalmente, ser resuelto dentro de la acción de ineficacia del traslado entre regímenes pensionales, sino por medio de la acción resarcitoria de perjuicios prevista en el decreto 720 de 1994.

Tampoco puede accederse a la ineficacia del traslado ejecutado por el actor del RPMPD al RAIS el 8 de julio de 1996, en consideración a que ella se encuentra inmersa en la prohibición legal establecida en el literal e) del artículo 13 de la ley 100 de 1993 modificado por el artículo 2° de la ley 797 de 2003.

En caso de que se confirme la declaratoria de ineficacia del traslado al régimen de ahorro individual con solidaridad realizado por la demandante el 8 de julio de 1996, solicita que se condene al fondo privado de pensiones Porvenir S.A. a cancelar a favor de la Administradora Colombiana de Pensiones, a título de sanción, un cálculo actuarial en el que se tenga en cuenta las futuras mesadas pensionales que podría devengar la actora en el RPMPD.

Al haber resultado afectados los intereses de la Administradora Colombiana de Pensiones, se dispuso también el grado jurisdiccional de consulta a su favor.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Conforme se dejó plasmado en la constancia emitida por la Secretaría de la Corporación, únicamente los fondos privados de pensiones accionados hicieron uso del derecho a remitir en término los alegatos de conclusión en esta sede.

En cuanto a su contenido, teniendo en cuenta que el artículo 279 del CGP dispone que *“No se podrá hacer transcripciones o reproducciones de actas, decisiones o conceptos que obren en el expediente.”*, baste decir que, los argumentos expuestos por la AFP Porvenir S.A. coinciden con los narrados en la sustentación del recurso de apelación; mientras que, la AFP Protección S.A., con idénticos argumentos a los emitidos en la contestación de la demanda, solicita que se revoque la sentencia proferida por la *a quo* y en consecuencia no se acceda a las pretensiones de la actora.

Así las cosas, atendidas las argumentaciones a esta Sala de Decisión le corresponde resolver los siguientes:

PROBLEMAS JURÍDICOS

De acuerdo con la valoración probatoria que se realice al interior del proceso ¿Hay lugar a declarar ineficaz la afiliación de la señora Gladys Elena Toro Gómez al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad efectuada el 8 de julio de 1996, así como el del movimiento ejecutado en su interior?

¿Cuáles son las consecuencias prácticas de declarar las ineficacias de los traslados surtidos entre regímenes pensionales?

¿Tiene razón el fondo privado de pensiones Porvenir S.A. cuando afirma que no es jurídicamente viable condenarla a restituir a favor de Colpensiones la totalidad de los dineros que se ordenaron por parte de la a quo?

¿Hay lugar a condenar al fondo privado de pensiones Protección S.A. a restituir dineros a favor de Colpensiones?

¿Con el cambio de régimen pensional ejecutado por la demandante se constituyó en su favor un bono pensional conforme con lo dispuesto en el artículo 115 de la ley 100 de 1993?

¿Existe algún inconveniente en torno a que la afiliada se encuentre a menos de diez años de arribar a la edad mínima de pensión prevista en el régimen de prima media con prestación definida?

¿Es procedente condenar a la AFP Porvenir S.A. a cancelar a la Administradora Colombiana de Pensiones, a título de sanción, una suma igual al valor de las eventuales mesadas pensionales que se le pudieren otorgar a la demandante en el RPMPD?

Con el propósito de dar solución a los interrogantes en el caso concreto, la Sala considera necesario precisar, el siguiente:

FUNDAMENTO JURISPRUDENCIAL

1. Análisis jurídico que debe abordar el juez cuando se alega ausencia de información parcial o total por parte de las administradoras en los traslados entre regímenes pensionales.

En sentencia STL4759 de 22 de julio de 2020, la Sala de Casación Laboral indicó:

*“En el caso bajo estudio, se hace necesario precisar, que en reiterada jurisprudencia esta Sala de Casación Laboral ha dejado clara su postura al indicar que la elección a cualquiera de los dos regímenes pensionales existentes, **debe estar precedida de una decisión libre y voluntaria, de suerte que las administradoras de pensiones tienen el deber de brindar a sus afiliados una asesoría que les permita tener los elementos de juicio suficientes para advertir la trascendencia de la decisión tomada al momento del traslado, sin importar si la persona es o no beneficiaria del régimen de transición, o si está próximo a pensionarse.**”* (Negrillas fuera de texto).

Y más adelante reiteró:

*“Así, en sentencias CSJ SL 31989, 9 sep. 2008, CSJ SL 31314, 9 sep. 2008, CSJ SL 33083, 22 nov. 2011, CSJ SL12136-2014, CSJ SL19447-2017, CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018, CSJ SL452-2019, CSJ SL1688-2019 y SL1689- 2019, esta Sala ha determinado de manera pacífica que la reacción del ordenamiento jurídico -artículos 271 y 272 de la Ley 100 de 1993- a la afiliación desinformada es la ineficacia, o la exclusión de todo efecto jurídico del acto de traslado. **Por este motivo, el examen del acto del cambio de régimen pensional, por transgresión del deber de información, tiene que abordarse desde la institución de la ineficacia en sentido estricto y no desde el régimen de las nulidades sustanciales.**”* (Negrillas fuera de texto).

2. Sobre el deber de información.

Frente a este ítem, la Corte Suprema de Justicia en providencia SL1452 de 3 de abril de 2019, señaló que el deber de información a cargo de las administradoras de fondos de pensiones ha sido exigible desde el momento de su creación, identificando tres etapas en el que el nivel de exigencia en la información se ha incrementado de acuerdo con la evolución histórica de las normas que regulan la materia; lo que expuso en resumen así:

“El anterior recuento sobre la evolución normativa del deber de información a cargo de las administradoras de pensiones podría, a grandes rasgos, sintetizarse así:

<i>Etapas acumulativas</i>	<i>Normas que obligan a las administradoras de</i>	<i>Contenido mínimo y alcance del</i>

	pensiones a dar información	deber de información
<i>Deber de información</i>	Arts. 13 literal b), 271 y 272 de la Ley 100 de 1993 Art. 97, numeral 1 del Decreto 663 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 797 de 2003 Disposiciones constitucionales relativas al derecho a la información, no menoscabo de derechos laborales y autonomía personal	Ilustración de las características, condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales, lo que incluye dar a conocer la existencia de un régimen de transición y la eventual pérdida de beneficios pensionales
<i>Deber de información, asesoría y buen consejo</i>	Artículo 3, literal c) de la Ley 1328 de 2009 Decreto 2241 de 2010	Implica el análisis previo, calificado y global de los antecedentes del afiliado y los pormenores de los regímenes pensionales, a fin de que el asesor o promotor pueda emitir un consejo, sugerencia o recomendación al afiliado acerca de lo que más le conviene y, por tanto, lo que podría perjudicarlo
<i>Deber de información, asesoría, buen consejo y doble asesoría.</i>	Ley 1748 de 2014 Artículo 3 del Decreto 2071 de 2015 Circular Externa n. 016 de 2016	Junto con lo anterior, lleva inmerso el derecho a obtener asesoría de los representantes de ambos regímenes pensionales.

3. Sobre la valoración probatoria

Continuando con su exposición argumentativa, el máximo órgano de la jurisdicción laboral sentó frente al punto:

“Según lo expuesto precedentemente, es la demostración de un consentimiento informado en el traslado de régimen, el que tiene la virtud de generar en el juzgador la convicción de que ese contrato de aseguramiento goza de plena validez.

Bajo tal premisa, frente al tema puntual de a quién le corresponde demostrarla, debe precisarse que si el afiliado alega que no recibió la información debida cuando se afilió, ello corresponde a un supuesto negativo que no puede demostrarse materialmente por quien lo invoca.

En consecuencia, si se arguye que a la afiliación, la AFP no suministró información veraz y suficiente, pese a que debía hacerlo, se dice con ello, que la entidad incumplió voluntariamente una gama de obligaciones de las que depende la validez del contrato de aseguramiento. En ese sentido, tal afirmación se acredita con el hecho positivo contrario, esto es, que se suministró la asesoría en forma correcta. Entonces, como el trabajador no puede acreditar que no recibió información, corresponde a su contraparte demostrar que sí la brindó, dado que es quien está en posición de hacerlo.”.

Sin embargo, la Sala Plena de la Corte Constitucional, en sentencia SU107-2024 decidió modular el referido precedente de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en torno a la inversión de la carga probatoria respecto a los procesos ordinarios en los que se invoca la ineficacia de los traslados entre regímenes pensionales por la falta de información, al concluir que dicho precedente resulta *“desproporcionado en materia probatoria y con ello viola el derecho constitucional al debido proceso en los casos en los cuales se discute la ineficacia del traslado de los afiliados del RPM al RAIS por problemas de información ocurridos entre 1993 y 2009.”*, añadiendo que *“La Corte consideró que de conformidad con la Constitución y la ley procesal no se pueden imponer cargas probatorias imposibles de cumplir para ninguna de las partes (ni al afiliado, ni a la AFP), así como no se puede despojar al juez de su papel de director del proceso, de su autonomía judicial para decretar y practicar todas las pruebas que sean necesarias, pertinentes y conducentes para analizar las pretensiones o las excepciones propuestas y de su facultad para conforme a las reglas de la sana crítica valorar las pruebas con el objeto de resolver los casos de ineficacia de traslados de los afiliados del RPM al RAIS.”.*

Bajo ese entendido, el máximo órgano de la jurisdicción constitucional dispuso, que:

“... en los procesos donde se pretenda declarar la ineficacia de un traslado deben tenerse en cuenta, de manera exclusiva, las reglas contenidas en la Constitución Política, el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y en el Código General del Proceso que se refieren al debido proceso. Esto supone que el juez, debe actuar como director del proceso judicial, con la autonomía e independencia que le son propios y, dentro de las muchas actuaciones dirigidas a formar su convencimiento para decidir lo que en derecho corresponda, puede:

(i) Decretar, practicar y valorar en igualdad todas las pruebas que soliciten las partes que sean necesarias, pertinentes y conducentes para demostrar los hechos que sirven de causa a las pretensiones o las excepciones.

(ii) Procurar, de manera oficiosa, la obtención de pruebas acudiendo a las enlistadas en el Código General del Proceso, tales como “(...) la declaración de parte, la confesión, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios, los informes”, y las demás que considere necesarias, pertinentes y conducentes.

(iii) Valorar las pruebas decretadas y debidamente practicadas con su intermediación, de manera individual y en su conjunto con las demás, luego de lo cual puede determinar el grado de convicción que aquellas ofrecen sobre lo ocurrido.

(iv) Acudir a la prueba indiciaria si lo estima necesario, en los términos de los artículos 176 y 242 del CGP; e

(v) Invertir la carga de la prueba cuando, analizando el caso concreto y la posición de las partes, esté ante un demandante que se encuentra en la imposibilidad de demostrar sus dichos, y en un proceso donde no haya sido posible desentrañar por completo la verdad a pesar de los esfuerzos oficiosos.”

Definiendo finalmente que esa decisión “que supone una modificación al precedente de la Corte Suprema de Justicia, debe ser extendida, **con efectos inter pares y de inmediato cumplimiento, a todas las demandas que estén en curso ante la Jurisdicción Ordinaria Laboral en todos aquellos procesos que siguen su trámite actualmente, y en los que se inicien con posterioridad a esta providencia.”**

Así las cosas, en atención a lo determinado por la Sala Plena de la Corte Constitucional en la referida sentencia SU107-2024, a la que le otorgó **efectos inter pares y de inmediato cumplimiento para todos los procesos que se están adelantando actualmente ante la Jurisdicción Ordinaria Laboral en materia de ineficacia de traslado entre regímenes pensionales**, esta Sala de Decisión

procederá a dar cumplimiento inmediato al precedente definido por la Corte Constitucional en materia probatoria en este tipo de asuntos.

4. Sobre los denominados actos de relacionamiento.

A pesar de que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia CSJ SL3752-2020 hizo una amplia explicación de la importancia de los actos de relacionamiento para ratificar la voluntad de permanecer y pertenecer al régimen de ahorro individual con solidaridad, pese a que el acto jurídico con el que se materializaba el traslado entre regímenes pensionales hubiere sido defectuoso al no habersele suministrado al afiliado la información que por ley correspondía; lo cierto es que la Alta Magistratura, en sentencia CSJ SL1055-2022, recogió dicha postura argumentando que la discusión que rodea la validez del cambio de régimen pensional de los afiliados se sitúa única y exclusivamente en el momento en que se produce el traslado entre regímenes pensionales, ya que resulta equivocado ubicar esa discusión en actuaciones posteriores que no tienen la virtud de validar un acto jurídico anterior que no cumplió con el lleno de los requisitos legales tornándolo ineficaz; nueva postura que explicó en los siguientes términos:

“Pues bien, como se explicó en las sentencias CSJ SL5686-2021 y SL5688-2021, los argumentos de esta índole son inadmisibles pues desatienden que el eje central de estas discusiones está en determinar si al momento del traslado de prima media al RAIS la persona contó con información suficiente para tomar esa decisión. En este sentido, los actos u omisiones posteriores del afiliado, bien sea porque se trasladó entre fondos privados o no retornó a prima media en las oportunidades legales previstas, no pueden validar el desacato legal que genera la ineficacia del acto jurídico del traslado de régimen, precisamente porque al ser posteriores dejan intactos los hechos u omisiones que anteceden al acto jurídico ineficaz, el cual no puede sanearse como la nulidad.

De modo que no es dable siquiera sugerir que los posteriores traslados entre administradoras pueden configurar un acto de relacionamiento capaz de ratificar la voluntad de permanencia en ellas, como se infiere de las decisiones de la Sala de Descongestión de esta Corte CSJ SL249-2022 y SL259-2022. Nótese que, conforme la perspectiva explicada, esa voluntad de permanencia en el RAIS es inane dado que no desvirtúa el

incumplimiento del deber de información y además ubica la discusión en actuaciones que estarían respaldadas en un acto jurídico ineficaz, esto es, el del traslado inicial.

Justamente lo anterior explica que la acción para demandar estos asuntos no sea la de nulidad -como también lo sugieren de forma equivocada aquellas providencias- sino la de ineficacia, en la cual, se reitera, lo relevante es determinar, sin más agregados, si la persona al momento de suscribir el acto de traslado de régimen pensional ha sido debidamente informada sobre las ventajas, desventajas y consecuencias de su traslado y permanencia en el RAIS.

*Por tanto, nuevamente se enfatiza que este es el precedente vigente y en vigor de la Sala de Casación Laboral de esta Corte, **y recoge cualquier otro que le sea contrario, en especial el condensado en aquellas providencias.***” (Negrillas por fuera de texto).

Tal postura, entiende la Sala, fue ratificada por el máximo órgano de la jurisdicción ordinaria laboral en las sentencias STL7302-2023 y STL9792-2023 en las que insistió que la discusión en este tipo de casos se centra únicamente en la validez del acto jurídico con el que se materializa el cambio de régimen pensional de los afiliados, al punto que en la última de ellas –STL9792-2023- la Corte le restó efectos a un documento que contenía la reasesoría de un afiliado.

En el anterior orden de ideas, esta Sala de Decisión continuará realizando el estudio de este tipo de casos, bajo la senda ordenada por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

CASO CONCRETO

Conforme se expuso en el primer punto del fundamento jurisprudencial, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia tiene definido que la acción que se debe estudiar cuando se reclama la ausencia total o parcial del deber de información por parte de los fondos privados de pensiones, no es otra que la ineficacia del acto jurídico que permitió el traslado entre regímenes pensionales, por lo que al haber orientado la actora la demanda en ese sentido, por imperativo jurisprudencial, lo que corresponde es analizar el caso en la forma determinada por la Corte Suprema

de Justicia, esto es, si el cambio de régimen pensional de la demandante se dio en términos de eficacia, como correctamente lo abordó la funcionaria de primera instancia.

Con la solicitud de vinculación N°335908 y número de uso interno 00205927 realizada por la señora Gladys Elena Toro Gómez ante el fondo privado de pensiones Protección S.A. el 8 de julio de 1996 -pág.24 archivo 31 carpeta primera instancia-, la demandante se trasladó del régimen de prima media con prestación definida al de ahorro individual con solidaridad, sin embargo, la actora inicia la presente acción al considerar que el cambio de régimen pensional no cumplió con el lleno de los requisitos legales, al no habersele suministrado la información sobre las consecuencias que conllevaba tomar esa decisión, viciándose de esa manera su consentimiento; mientras que los fondos privados de pensiones accionados y la Administradora Colombiana de Pensiones sostienen que el traslado efectuado por la actora del RPMPD al RAIS, se ejecutó bajo el estricto cumplimiento de la Ley, entre otros aspectos, brindándosele la información básica que se exigía para ese momento histórico (primera etapa).

Conforme con la litis que se plantea en este asunto y siguiendo lo dispuesto por la Corte Constitucional en la sentencia SU107-2024, procederá a verificar la Sala sí, conforme con el material probatorio incorporado en el plenario, el cambio de régimen pensional ejecutado por la demandante del régimen de prima media con prestación definida al de ahorro individual con solidaridad el 8 de julio de 1996, se hizo brindándole a la señora Gladys Elena Toro Gómez una información básica, que, según lo establecido en la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia consistía en:

Realizar una *“Ilustración de las características, condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales, lo que incluye dar a conocer la existencia de un régimen de transición y la eventual pérdida de beneficios pensionales.”*

Para tales efectos, fueron incorporadas al plenario las siguientes pruebas documentales: i) Formulario de afiliación N°335908 de 8 de julio de 1996, con el que se ejecutó el cambio de régimen pensional de la actora; ii) Historial de vinculaciones emitida por el SIAFP de Asofondos; iii) Constancia de traslado de aportes de Protección S.A. a Porvenir S.A.; iv) Comparativo de características de los regímenes pensionales, y; v) Comunicado de prensa. (Págs.24 a 39 archivo 31 carpeta primera instancia)

Con el formulario de afiliación y el historial de vinculaciones emitido por el SIAFP de Asofondos se acreditan las fechas en las que la demandante hizo su vinculación inicial al RPMPD, su paso al RAIS y el movimiento ejecutado al interior del régimen pensional y, si bien en el formulario de afiliación obra la firma de la demandante y sus datos personales, además de un recuadro preimpreso que se titula como *“Voluntad de selección y afiliación”* en el que solamente se deja constancia que *“la selección del régimen de ahorro individual con solidaridad la he efectuado en forma libre, espontánea y sin presiones.”*; agregándose que los datos allí proporcionados son verdaderos; lo cierto es que, como puede verse, en ese documento no reposa la información básica que le permitiera conocer a la actora las consecuencias que conllevaba ejecutar ese acto jurídico.

En lo que concierne a la constancia de traslado de aportes de la AFP Protección S.A. a la AFP Porvenir S.A., ello lo único que demuestra es que, una vez la afiliada se movilizó al interior del RAIS, el fondo privado de pensiones del que migró cumplió con su obligación de remitir todos los dineros que se encontraban en su cuenta de ahorro individual hacía la AFP Porvenir S.A., para que dicha entidad continuara con su administración en la forma definida por la Ley.

Ahora, si bien el fondo privado de pensiones Protección S.A. allega el comparativo de las características de los regímenes pensionales que componen el sistema general de pensiones, con el que se podría acreditar el suministro de la información básica

exigida para el 8 de julio de 1996, la verdad es que a ese documento no se le puede dar el alcance probatorio pretendido por ese fondo privado de pensiones, ya que el mismo carece de la fecha de su elaboración, es decir, se desconoce cuándo se emitió, pero sobre todo, no tiene constancia de haber sido recibido por la demandante, ya que no contiene ningún signo que permite concluir que él le fue debidamente entregado a la señora Gladys Elena Toro Gómez el 8 de julio de 1996, lo que permite concluir que la demandante no tuvo acceso a ese documento antes de tomar la decisión de trasladarse del RPMPD al RAIS.

En lo atinente al comunicado de prensa, si bien en ese documento no se vislumbra su fecha de emisión, la verdad es que de su contenido se extracta que los fondos privados de pensiones ponían en conocimiento público de sus afiliados el contenido de las normas que permitieron, por una sola vez, el cambio de régimen pensional de los afiliados que se encontraran a menos de 10 años de cumplir la edad mínima de pensión en el RPMPD para el 28 de enero de 2004, es decir, se trata de un documento emitido con posterioridad a esa fecha, esto es, que no es una información que debía ponérsele de presente a la demandante para el 8 de julio de 1996 y por tanto no incide en nada en el la litis planteada en el presente asunto.

De otro lado, en el interrogatorio de parte, la señora Gladys Elena Toro Gómez informó que actualmente se encuentra activa como cotizante, en calidad de higienista en una institución de salud de la ciudad de Pereira.

En torno al momento en que se produjo el cambio de régimen pensional el 8 de julio de 1996, sostuvo que en esa época los agentes comerciales de los fondos privados de pensiones visitaban constantemente las instalaciones de la entidad en la que prestaba sus servicios en aquella época, hasta que uno de ellos, el de la AFP Protección S.A., en ese día, les manifestó en una reunión colectiva que el Instituto de Seguros Sociales iba a desaparecer, razón por la que esos aportes se encontraban en riesgo de perderse si no se trasladaba al régimen de ahorro individual con solidaridad; también le indicaron que en el RAIS iba a obtener unos

muy buenos rendimientos financieros, sin embargo, manifestó que no le dieron ninguna otra información frente a las consecuencias que conllevaba tomar esa decisión; es decir que, para ese momento, a la demandante no le mostraron el panorama completo de lo que generaba tomar la decisión de cambiar de régimen pensional, ya que no se le expusieron detalladamente las características de ambos regímenes pensionales, pero ante todo, no le hablaron de los riesgos reales que conllevaba estar o no afiliado al RPMPD y al RAIS.

Así las cosas, al valorarse integralmente las pruebas allegadas al plenario, cabe concluir que el traslado ejecutado por la señora Gladys Elena Toro Gómez el 8 de julio de 1996 del RPMPD al RAIS no cumplió con el lleno de los requisitos exigidos en la Ley, ya que el fondo privado de pensiones Protección S.A. no le hizo a la afiliada una *“Ilustración de las características, condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales, lo que incluye dar a conocer la existencia de un régimen de transición y la eventual pérdida de beneficios pensionales.”*; siendo del caso recordar que, independientemente de que la actora se haya movilizado al interior del RAIS y haya permanecido afiliada a ese régimen pensional por más de veinte años realizando cotizaciones a través de él, lo cierto es que, como viene de verse, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia CSJ SL1055-2022, cambió su postura frente a los actos de relacionamiento, al determinar que las actuaciones posteriores al acto jurídico ineficaz no tienen la fuerza jurídica para validarlo, en otras palabras, **que no existen actos de relacionamiento con la capacidad de hacer desaparecer la asimetría en la información que se produjo en el momento que se ejecutó el cambio de régimen pensional por parte de los afiliados.**

Por lo expuesto, al no haberse ejecutado el traslado entre regímenes pensionales de la señora Toro Gómez bajo el estricto cumplimiento de la Ley para el 8 de julio de 1996, indefectiblemente, conforme con lo sentado por la Corte Suprema de Justicia, no queda otro camino que confirmar la decisión emitida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito, consistente en declarar la ineficacia del acto

jurídico por medio del cual el accionante se trasladó del régimen de prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual con solidaridad el 8 de julio de 1996; pero se adicionará el ordinal primero de la sentencia recurrida con el fin de declarar también la ineficacia del movimiento ejecutado por ella al interior del RAIS; por lo que todos los actos ejecutados en ese régimen pensional carecen de validez, quedando válida y vigente la afiliación primigenia efectuada por la señora Toro Gómez al RPMPD administrado actualmente por la Administradora Colombiana de Pensiones, como correctamente lo definió la *a quo* en el ordinal segundo de la providencia bajo estudio.

Al no tener ningún efecto jurídico el cambio de régimen pensional y el movimiento ejecutados por la señora Gladys Elena Toro Gómez, ni ninguno de los actos ejecutados al interior del RAIS, efectivamente hay lugar a condenar al fondo privado de pensiones Porvenir S.A. *-en el que se encontraba actualmente vinculada la demandante-* como lo determinó la falladora de primera instancia, pero para mayor claridad, se modificará el ordinal tercero de la sentencia recurrida en el sentido de pormenorizar que los dineros que debe reintegrar a la Administradora Colombiana de Pensiones son aquellos que se encuentran en la cuenta de ahorro individual de la afiliada y que provienen de las cotizaciones o aportes al sistema general de pensiones con sus intereses o rendimientos financieros, como lo ha sentado en su jurisprudencia la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Además de restituir los emolumentos relacionados líneas atrás, ha sido reiterada la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en definir que cuando se declara la ineficacia del cambio de régimen pensional de un afiliado, lo que corresponde es ordenarle a los fondos privados de pensiones que restituya a la Administradora Colombiana de Pensiones **los gastos de administración, primas de los seguros previsionales de invalidez y sobrevivientes, así como los dineros destinados a financiar la garantía de pensión mínima, debidamente indexados y con cargo a sus propios recursos;** postura que reiteró en la sentencia CSJ SL3179-2023, en los siguientes términos:

“Ello significa que en este caso el regreso al statu quo implica que la actora debe ser redirigida al único ente que hoy administra las afiliaciones del régimen de prima media con prestación definida, esto es, el ISS, hoy Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones, tal como se advirtió en casación.

En consecuencia, como la ineficacia implica que para todos los efectos legales el demandante siempre estuvo afiliado al RPM, además de los saldos obrantes en la cuenta de ahorro individual, sus rendimientos y bonos pensionales, si hay lugar a ellos, Porvenir S.A. deberá devolver a Colpensiones el porcentaje correspondiente a los gastos de administración y primas de seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia, y el porcentaje destinado al fondo de garantía de pensión mínima, debidamente indexados y con cargo a sus propios recursos, pues estos conceptos, desde el nacimiento del acto ineficaz, debieron ingresar al RPM administrado por Colpensiones (CSJ SL3465-2022, CSJ SL2229-2022 y CSJ SL3188-2022).

Al momento de cumplirse esta orden, los conceptos deberán aparecer discriminados con sus respectivos valores con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen (CSJ SL3803-2021).”

En este caso, la funcionaria de primera instancia, no solamente no ordenó en esos mismos términos la condena en contra de la AFP Porvenir S.A. -ya que en la parte considerativa habló de reintegrar esos dineros a Colpensiones debidamente indexados, pero sin determinar que esa devolución operaba con cargo a sus propios recursos, para posteriormente, de manera generalizada ordenarle a esa entidad, que procediera a restituir las sumas de dinero en la forma establecida en la parte considerativa-, sino también que, en lugar de emitir la orden en ese aspecto de manera adecuada en contra del otro fondo privado de pensiones en el que estuvo vinculada la afiliada, esto es, la AFP Protección S.A., autorizó equivocadamente a la AFP Porvenir S.A. a que repitiera en contra de esa administradora pensional privada por los dineros que debía restituir a Colpensiones, por lo que, con el objeto de emitir las condenas de manera adecuada, se modificarán los ordinales tercero y cuarto de la sentencia, para condenar a los fondos privados de pensiones accionados a restituir a la Administradora Colombiana de Pensiones, con cargo a sus propios recursos y debidamente indexados, los dineros que fueron cobrados a la actora durante su afiliación en cada una de esas entidades por concepto de gastos o cuotas de administración, primas de los seguros previsionales de invalidez y sobrevivientes,

así como el porcentaje destinado al fondo de garantía de pensión mínima; sin que con esa decisión se esté afectando los intereses de terceros que no asistieron al proceso (aseguradoras y reaseguradoras), pues precisamente la orden dirigida en ese sentido lo que lleva es a que los fondos privados de pensiones respondan con su patrimonio por las deficiencias en que incurrieron al momento de efectuar la vinculación de los afiliados.

Por otro lado, siguiendo precisamente lo definido por el máximo órgano de la jurisdicción ordinaria laboral en la sentencia CSJ SL3179-2023, se les ordenará a los fondos privados de pensiones accionados que, al momento de cumplir con esas órdenes, procedan a relacionar cada concepto y el valor que se restituye por cada uno de ellos junto con el detalle pormenorizado de los ciclos cotizados, el IBC, aportes y toda la información relevante que los justifique.

Al haber operado un traslado desde el régimen de prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual con solidaridad el 8 de julio de 1996 y al haber cotizado la accionante más de 150 semanas al RPMPD antes de que se produjera el traslado al RAIS, más concretamente 752 semanas de cotización, como se constata con la información inmersa en la historia laboral allegada por Porvenir S.A. con la contestación de la demanda -archivo 28 carpeta primera instancia- se generó en ese momento un bono pensional tipo A en favor de la señora Gladys Elena Toro Gómez al cumplirse con los requisitos previstos en el artículo 115 de la ley 100 de 1993.

A pesar de que no existe prueba que demuestre el estado actual de ese instrumento de deuda pública, lo cierto es que el mismo debió redimirse normalmente el 7 de enero de 2022, fecha en que la actora cumplió los 60 años, al haber nacido en la misma calenda del año 1962 como se ve en la copia de su cédula de ciudadanía -pág.1 archivo 05 carpeta primera instancia-; por lo que, teniendo en cuenta que el artículo 17 del Decreto 1748 de 1995 dispone que esta clase de bonos se pagan dentro del mes siguiente a la fecha de redención (sin necesidad de solicitud previa), claro es que el mismo debió entrar a la cuenta de ahorro individual del demandante

antes del 7 de febrero de 2022; razón por la que, al tener que restituirse las cosas al estado en el que se encontraban para el 8 de julio de 1996, al carecer de efectos jurídicos el traslado al RAIS ejecutado en esa calenda, se adicionará la sentencia proferida por la *a quo* en el sentido de condenar al fondo privado de pensiones Porvenir S.A., a que, en caso de haber recibido el pago del bono pensional en favor de la cuenta de ahorro individual de la actora, proceda a restituir la suma pagada por ese concepto a favor de la OBP del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, suma que deberá estar debidamente indexada, precisando que esa actualización del valor del bono pensional debe ser cancelada con los recursos propios del fondo privado de pensiones Porvenir S.A.

Así mismo, se modificará el ordinal séptimo de la sentencia de primera instancia, pues si bien la *a quo* ordenó correctamente que se comunicara la decisión a la OBP del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, no especificó en esa orden cuál es la razón de ser de esa decisión, que no es otra diferente a que dicha entidad tenga conocimiento de la orden impartida frente al bono pensional tipo A redimido y eventualmente pagado por parte ella a favor de la cuenta de ahorro individual de la accionante, y para que posteriormente, haciendo uso de trámites internos y a través de canales institucionales, ejecute todas las acciones pertinentes para retrotraer las cosas al estado en el que se encontraban para el 8 de julio de 1996.

En torno al hecho de que la accionante arribó a la edad mínima de pensión en el RPMPD, la verdad es que ese suceso no afecta en nada la decisión tomada en este proceso, por cuanto, como se ha explicado recurrentemente a lo largo de la presente providencia, la declaratoria de ineficacia trae como consecuencia jurídica que los actos emitidos a partir de ese momento no tienen ninguna validez, lo que lleva a que las cosas se reestablezcan al estado en el que se encontraban, es decir, que al no haberse consumado legalmente el cambio de régimen pensional, el mismo no tiene validez y por tanto la demandante siempre ha estado afiliada al régimen de prima media con prestación definida administrado actualmente por Colpensiones, lo que muestra que de ninguna manera se está ordenando un nuevo traslado entre

regímenes pensionales y por tanto no se transgrede la prohibición legal prevista en el literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 2° de la Ley 797 de 2003.

Frente a la petición elevada por la Administradora Colombiana de Pensiones relativa a que se condene a la AFP Porvenir S.A. a cancelar a título de sanción una suma igual al valor de las futuras mesadas pensionales que pudieren reconocérsele a la accionante en el régimen de prima media con prestación definida, lo primero que cabe señalar es que la etapa de sustentación del recurso de apelación no es el acto procesal previsto para realizar pretensiones, resultando claro por demás que el demandante no dirigió ninguna pretensión en ese sentido, mientras que las consecuencias prácticas de la declaratoria de ineficacia son las que la Corte Suprema de Justicia ha reseñado en su línea jurisprudencial en este tipo de asuntos y que ya han sido aplicadas en estricto sentido en este caso. Por lo expuesto, no hay lugar a acceder a la petición condenatoria elevada por la Administradora Colombiana de Pensiones en la sustentación del recurso de apelación.

Como quiera que en la sentencia STL10364-2020 la Sala de Casación Laboral instó a esta Sala a tener en cuenta que la condena en costas se debe fulminar con independencia de los factores subjetivos que pudieren existir en favor de la persona que resulte vencida o de aquella a quien se resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, las costas en esta instancia corren a cargo de las entidades recurrentes en un 100% y por partes iguales, en favor de la demandante.

En mérito de lo expuesto, la **Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira**, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO. ADICIONAR el ordinal PRIMERO de la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito, con un literal del siguiente tenor:

“B. DECLARAR la ineficacia del movimiento ejecutado por la señora GLADYS ELENA TORO GÓMEZ al interior del régimen de ahorro individual con solidaridad hacía el fondo privado de pensiones PORVENIR S.A en donde se encontraba vinculada actualmente.”

SEGUNDO. MODIFICAR el ordinal TERCERO de la sentencia de primera instancia, el cuál quedará así:

“TERCERO. A. CONDENAR al fondo privado de pensiones PORVENIR S.A, en donde se encontraba actualmente vinculada la señora GLADYS ELENA TORO GÓMEZ, a reintegrar a favor de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, los dineros que se encontraban depositados en la cuenta de ahorro individual de la demandante proveniente de los aportes o cotizaciones al sistema general de pensiones junto con sus intereses y rendimientos financieros.

B. CONDENAR al fondo privado de pensiones PORVENIR S.A, en donde se encontraba actualmente vinculada la señora GLADYS ELENA TORO GÓMEZ, a reintegrar a favor de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, con cargo a sus propios recursos y debidamente indexados, los dineros que fueron cobrados a la afiliada durante su permanencia en esa entidad y que estuvieron destinados a cancelar los gastos o cuotas de administración, primas de los seguros previsionales de invalidez y sobrevivientes, así como los dineros destinados a financiar la garantía de pensión mínima.

C. ORDENARLE al fondo privado de pensiones PORVENIR S.A. que, al momento de cumplir con la orden aquí impartida, proceda a relacionar cada concepto y el valor que se restituye por cada uno de ellos junto con el detalle pormenorizado de los ciclos cotizados, el IBC, aportes y toda la información relevante que los justifique.”.

TERCERO. ADICIONAR el ordinal TERCERO de la providencia objeto de estudio, con un literal del siguiente tenor:

“CUARTO. D. ORDENARLE al fondo privado de pensiones PORVENIR S.A., a que, en caso de haber recibido el pago de un bono pensional en favor de la cuenta de ahorro individual de la actora, proceda a restituir la suma pagada por ese concepto a favor de la OBP del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, suma que deberá estar debidamente indexada, precisando que esa actualización del valor del bono pensional deberá ser cancelada con los recursos propios del fondo privado de pensiones PORVENIR S.A.”.

CUARTO. MODIFICAR el ordinal CUARTO de la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito, el cuál quedará así:

*“**QUINTO. A. CONDENAR** al fondo privado de pensiones PROTECCIÓN S.A. a reintegrar a favor de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, con cargo a sus propios recursos y debidamente indexados, los dineros que fueron cobrados a la afiliada durante su permanencia en esa entidad y que estuvieron destinados a cancelar los gastos o cuotas de administración, primas de los seguros previsionales de invalidez y sobrevivientes, así como los dineros dirigidos a financiar la garantía de pensión mínima.*

***B. ORDENARLE** al fondo privado de pensiones PROTECCIÓN S.A. que, al momento de cumplir con la orden aquí impartida, proceda a relacionar cada concepto y el valor que se restituye por cada uno de ellos junto con el detalle pormenorizado de los ciclos cotizados, el IBC, aportes y toda la información relevante que los justifique.”.*

QUINTO. MODIFICAR el ordinal SÉPTIMO de la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito, en el sentido de **COMUNICAR** a la OBP del MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO la decisión adoptada en este proceso, con el objeto de que tenga conocimiento de la orden impartida frente al bono pensional tipo A redimido y eventualmente pagado por parte de esa entidad a favor de la cuenta de ahorro individual de la accionante, y para que posteriormente, haciendo uso de trámites internos y a través de canales institucionales, ejecute todas las acciones pertinentes para retrotraer las cosas al estado en el que se encontraban para el 8 de julio de 1996.

SEXTO. CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia recurrida y consultada.

SÉPTIMO. CONDENAR en costas procesales a las entidades recurrentes en un 100% y por partes iguales, en favor de la parte actora.

Notifíquese por estado y a los correos electrónicos de los apoderados de las partes.

Quienes integran la Sala,

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ
Magistrado Ponente

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN
Magistrada

GERMÁN DARÍO GÓEZ VINASCO
Magistrado
Aclaración de Voto

Sin constancias ni firmas secretariales conforme artículo 9 de la Ley 2213 de 2022

Firmado Por:

Julio Cesar Salazar Muñoz
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Sala 002 Laboral
Tribunal Superior De Pereira - Risaralda

Ana Lucia Caicedo Calderon
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Sala 001 Laboral
Tribunal Superior De Pereira - Risaralda

German Dario Goetz Vinasco
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Sala 003 Laboral
Tribunal Superior De Pereira - Risaralda
Firma Con Aclaración De Voto

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **df8e9149c3370d2c5d532c513560b6ee0f9df25c4a7a8980395d763587fa59c**

Documento generado en 24/04/2024 02:03:23 p. m.

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>